

Santiago, catorce de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, por sentencia de dos de octubre de dos mil veintitrés, en los antecedentes RUC 1900874628-4, RIT 65-2023, condenó a **ESTEBAN MAURICIO CONCHA CATRILEO**, a la pena de **quinientos cuarenta y un días (541) de presidio menor en su grado medio**, como autor del delito consumado de **porte de municiones de arma de fuego**, previsto y sancionado en el artículo 9° en relación con el artículo 2 letra c) de la Ley N° 17.798, descubierto el 14 de agosto de 2019, en la misma comuna que sirve de asiento al Tribunal.

Además, se impuso al sentenciado las penas accesorias legales correspondientes y se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad que le fue impuesta.

En contra de dicho fallo, la defensa del acusado dedujo recurso de nulidad, arbitrio que fue conocido en la audiencia pública celebrada el veinticuatro de febrero pasado, convocándose a los intervinientes a la lectura de la sentencia para hoy, como consta en el acta respectiva.

Considerando:

1°) Que el recurso de nulidad se cimenta, de manera principal, en la causal de nulidad prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por haberse infringido las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho a la libertad personal del acusado, reconocidas en el artículo 19 N°3, inciso sexto, y N°7 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 85 del Código Procesal Penal.

Se esgrime que las infracciones a las garantías fundamentales se produjeron al haberse efectuado un control de identidad fundado en que su



defendido se encontraba bebiendo alcohol en la vía pública, falta administrativa que no resulta idónea para configurar un indicio que diera cuenta que se encontraba cometiendo o intentado cometer un crimen, simple delito o falta penal, en los términos descritos en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Agrega que tal circunstancia, no obstante haber sido advertida por la magistratura, concluye que el fundamento del control de identidad al que fue sometido estuvo dado porque los efectivos policiales vieron el culote de una munición en uno de los bolsillos de su pantalón, configurando el indicio que el aludido precepto exige para tales efectos. Sin embargo, agrega, para poder visualizar lo que una persona guarda en sus bolsillos, es necesario inspeccionar su contenido, actuación que no pudo ser realizada por los funcionarios policiales sin un indicio idóneo, por lo que la prueba obtenida a partir de ello resultó ilícita.

Finaliza solicitando se anule la sentencia y el juicio oral que la precede, se retrotraigan los autos al estado de realización de un nuevo juicio oral ante el tribunal no inhabilitado que corresponda, excluyéndose toda la prueba obtenida con infracción de las garantías de su defendido, la que precisa.

2º) Que, en subsidio, se hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) y el artículo 297 del mismo cuerpo de normas, por infracción a los principios de la lógica al valorarse la prueba rendida, particularmente el de razón suficiente.

Sostiene que en el fundamento undécimo de la sentencia impugnada, el Tribunal tiene por acreditada la participación de su representado, remitiéndose a lo expresado en el fundamento que antecede, sin embargo lo expresado en éste último no satisface las exigencias mínimas de valoración de la prueba, pues solo se trata de una repetición de las declaraciones prestadas en juicio por los testigos,



transcritas en la sentencia, sin realizar un razonamiento a través del método deductivo que permita reproducir las conclusiones del tribunal.

En lo relativo al control de identidad, el tribunal estimó que el mismo se fundó en que el imputado fue visto por los efectivos portando visiblemente en unos de sus bolsillos del pantalón, los cartuchos incautados, cuestión que no se desprende de la prueba testimonial incorporada al juicio por el persecutor, dado que los funcionarios policiales refirieron que fiscalizaron al encartado por haber visto a tres personas bebiendo alcohol en la vía pública.

Por lo anterior, solicita se anule la sentencia recurrida y el Juicio Oral que le sirvió de fundamento, se ordene la realización de un nuevo Juicio Oral por el tribunal no inhabilitado que corresponda.

3º) Que, en la audiencia realizada para el conocimiento del asunto, la parte recurrente formuló sus alegaciones corroborando lo expresado en el recurso, desistiéndose de la prueba ofrecida para acreditar las causales de nulidad promovidas; en tanto el representante del Ministerio Público señaló los motivos por los cuales debía ser desestimado.

4º) Que, para la debida comprensión de las objeciones plasmadas por el impugnante, es preciso tener presente que la sentencia objetada, en su motivo noveno, tuvo por acreditados los siguientes hechos:

“El día 14 de agosto de 2019, cerca de las 15:50 horas, al interior del Fuerte Tucapel de la comuna de Cañete, personal de Carabineros sorprendió a ESTEBAN MAURICIO CONCHA CATRILEO portando 3 cartuchos de escopeta calibre 12 milímetros sin percutar, sin contar para aquello con la autorización respectiva de la autoridad fiscalizadora de la ley de control de armas.”.

Los hechos antes escritos, fueron calificados por los jueces del Tribunal Oral como constitutivo del delito consumado de porte de municiones de arma de



fuego, previsto y sancionado en el artículo 9, en relación con el artículo 2 letra c) de la Ley N° 17.798, en el que le correspondió a Concha Catrileo participación en calidad de autor.

5°) Que, en lo concerniente a la infracción de las garantías fundamentales denunciadas en el motivo principal del recurso, todas las que se enmarcan en la garantía del debido proceso -por cuanto se habrían infringido en el contexto de un procedimiento penal en curso-, el que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Constitución Política de la República confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo.

Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

6°) Que, en la especie, la objeción planteada por la defensa se centra en determinar si el control de identidad practicado por los funcionarios policiales al acusado Concha Catrileo, se ajustó a las exigencias previstas en el artículo 85 del Código Procesal Penal, y particularmente si existió algún indicio de que éste hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta que justifique la restricción momentánea a sus derechos fundamentales.



Sobre el particular, conviene recordar que la aludida disposición regula el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 -que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia- así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

7º) Que, a fin de dirimir la ocurrencia de la infracción de las garantías fundamentales denunciadas, es menester estarse a lo asentado por la judicatura del fondo al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal en examen, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebrantaría de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal.

Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes de la causal principal del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.



8º) Que, en el caso *sub judice*, al parecer de los sentenciadores, la policía actuó en virtud de un indicio válido y suficiente que los habilitaba para llevar a cabo un control de identidad, por cuanto los funcionarios policiales se percataron que el imputado era uno de los tres sujetos que se encontraban bebiendo alcohol en la vía pública, lo que motivó que los efectivos se acercaran para fiscalizarlo y *“procedieran al registro de sus vestimentas, por haber visto el culote de un cartucho de escopeta, que salía desde el bolsillo izquierdo del pantalón de buzo”*, encontrando en esta diligencia tres cartuchos de escopeta calibre 12.

9º) Que, en consecuencia, se ha esgrimido como fundamento de un control de identidad la circunstancia de haber apreciado el personal policial a un sujeto bebiendo alcohol en la vía pública, conducta sancionada administrativamente en el artículo 113 de la Ley de Alcoholes, por lo que procedieron a su fiscalización, contexto en el cual habría surgido el indicio sobre la presunta actividad delictiva.

Sin embargo, tal comportamiento, desde una perspectiva *ex ante*, carece de la relevancia asignada para la procedencia del control, toda vez que en él no se advierten elementos precisos referidos a la comisión de ilícito alguno. En efecto, de acuerdo a lo asentado en el fallo, los funcionarios policiales efectuaban un patrullaje, observando la presencia de tres individuos bebiendo alcohol en la vía pública, por lo que adoptaron la decisión de fiscalizarlos, sin constatar alguna conducta adicional, de manera que lo efectivamente observado por ellos –tres sujetos en la vía pública bebiendo alcohol– configura por esencia una infracción administrativa, que sólo faculta a la policía a efectuar un control de identidad preventivo del artículo 12 de la Ley N°20.931 e informar la infracción al tribunal respectivo, pero en modo alguno pudo resultar idónea para revelar la tenencia de las municiones, pues sólo a resultas de un registro injustificado, lo cual quedó de manifiesto debido a que, los funcionarios policiales sólo estuvieron en condiciones



de advertir la existencia del culote de un cartucho de escopeta durante el control de identidad, precisamente al registrar lo que el acusado portaba en los bolsillos de su pantalón, luego de iniciarse la actuación policial y no antes de ésta.

De otro modo, se daría cabida como motivo para este control a los meros prejuicios y suposiciones de los funcionarios policiales, quienes podrían restringir la libertad de terceros, simplemente por la desconfianza o sospecha que les genera una persona que bebe alcohol en la vía pública con infracción a la ley del ramo, pues los efectivos pudieron únicamente constatar esa sola situación, sin que la persona realizara otra conducta, motivo que no puede en caso alguno fundar la actuación de agentes del Estado, pues se encuentra al margen de los rigurosos extremos del artículo 85 del Código Procesal Penal, por cuanto una actuación autónoma e intrusiva como el control de identidad y subsecuente registro de vestimentas debe, necesariamente y dado que afecta garantías constitucionales como el derecho a la intimidad, basarse en un indicio de carácter objetivo y, por ello, susceptible revisable judicialmente.

10°) Que, en este escenario los agentes policiales ejecutaron una incautación de evidencia al margen de la ley, porque de acuerdo a lo expresado por ellos mismos, como se advierte de la lectura de la sentencia y a partir de los presupuestos fácticos relatados en estrados por la defensa, resultó demostrado que la detención del imputado y el hallazgo de las municiones son la conclusión de la observación por parte de los funcionarios policiales de un individuo ingiriendo alcohol en la vía pública, por lo que se acercaron a practicarle un control de identidad, registrando sus vestimentas y más precisamente los bolsillos de sus pantalones, y luego de iniciado el procedimiento policial.

El indicio a que aluden los funcionarios que declaran en el juicio, corresponden a su observación del acusado en las condiciones descritas, esto es,



ingerir alcohol en la vía pública. Entonces, el indicio de que disponían estaba dado por esa circunstancia, sin que describieran acciones efectuadas por el imputado que pudieran hacer sospechar de una conducta ilícita, encontrando las municiones en los bolsillos del pantalón del acusado únicamente por el registro de aquella vestimenta al efectuarle un control de identidad.

11°) Que, así las cosas, por haberse sometido al acusado a un control de identidad y posterior registro de sus vestimentas, sin el concurso de un indicio objetivo de que estuviere cometiendo o intentare cometer un delito, ni de ninguno de los otros supuestos previstos en el artículo 85 del Código Procesal Penal que autorizan esa diligencia y, consecuentemente, permiten a la policía el registro de la referida vestimenta, ocurre que aquélla se desempeñó fuera de su marco legal y de sus competencias, vulnerando el derecho del imputado a un procedimiento justo y racional que debía desarrollarse con apego irrestricto a todos los derechos y las garantías constitucionales que le reconoce el legislador, por lo que la evidencia recogida en el procedimiento incoado respecto de Esteban Mauricio Concha Catrileo resulta ser ilícita, al haber sido obtenida en un proceder al margen de la ley.

En este sentido, aunque los jueces de la instancia hayan afirmado su convicción condenatoria en prueba producida en la audiencia, al emanar ella del mismo procedimiento viciado no puede ser siquiera considerada, por cuanto su origen está al margen de las prescripciones a las cuales la ley somete el actuar de los auxiliares del Ministerio Público en la faena de investigación.

12°) Que, de este modo, cuando los jueces del fondo valoraron en el juicio y en la sentencia que se pronunció los referidos antecedentes revestidos de ilegalidad, se incurrió en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales del imputado que aseguran su derecho a un debido proceso y a



que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racionales y justos, por cuanto dicha exigencia supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que en este caso quedó de manifiesto no ocurrió, infracción que sólo puede subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y dada la relación causal entre la diligencia censurada y la prueba obtenida, como ya se anotó, se retrotraerá la causa al estado de verificarse un nuevo juicio con exclusión de los elementos de cargo obtenidos con ocasión de ella, como se dirá en lo resolutivo.

13°) Que, en cuanto a la causal de nulidad absoluta invocada, habiendo sido alegada en forma subsidiaria a la que será acogida, se omite pronunciamiento a su respecto.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 377 y 384 del Código Procesal Penal, **se acoge** el recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública a favor de Esteban Mauricio Concha Catrileo y en consecuencia, **se invalidan** la sentencia de dos de octubre de dos mil veintitrés y el juicio oral que le antecedió en el proceso RIT 65-2023, RUC 1900874628-4, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, y se restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose del auto de apertura la prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Público.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Urquieta.

Rol N° 236.995-2023.



Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por el Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Ministra Sra. María Teresa Letelier R., Ministro (S) Sr. Roberto Contreras O., y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B y Carlos Urquieta S.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., María Teresa De Jesús Letelier R., Ministro Suplente Roberto Ignacio Contreras O. y los Abogados (as) Integrantes Carlos Antonio Urquieta S., Juan Carlos Ferrada B. Santiago, catorce de marzo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a catorce de marzo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

